

Resultados del CBD SBI-7

Análisis del Caucus de Mujeres del CBD

El Organo Subsidiario sobre la Aplicación (SBI) desempeña un papel fundamental en la configuración de las condiciones institucionales, financieras y prácticas que permiten que los compromisos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se traduzcan en acciones concretas. En la SBI-7, esto incluyó el análisis de la Revisión Global y la implementación acelerada del Marco de Cooperación de Corea del Sur (KMGBF), la movilización de recursos y el mecanismo financiero, la información sobre secuencias digitales, el desarrollo de capacidades y la cooperación técnica y científica, el Protocolo de Nagoya, la gestión del conocimiento, la transversalización y la educación sobre biodiversidad.

En estos debates, el género y la justicia están intrínsecamente ligados a la implementación: influyen en quién participa en las decisiones, qué conocimientos y contribuciones se reconocen, quién tiene acceso a financiación y apoyo técnico, y cómo se distribuyen los costos y beneficios de las acciones en materia de biodiversidad. Varias negociaciones también plantearon una cuestión fundamental sobre cómo se reconoce a los pueblos indígenas y las comunidades locales, a las mujeres y a los jóvenes en el marco de la Convención, incluyendo si sus derechos, roles y contribuciones específicos siguen siendo visibles o si quedan subsumidos en categorías más amplias de actores y partes interesadas.

Este análisis del Caucus de Mujeres del CBD examina algunos resultados del SBI-7 desde la perspectiva de género y justicia, destacando los avances, los problemas sin resolver y las prioridades para la COP17.

Contributors: Amelia Arreguín Prado, Cristina Eghenter, Edda Fernandez, Fatima El-aaraby, Laura Bermudez, Shruti Ajit and Pamela Tapia Diaz

Agosto de 2026

CBD Women



PUNTO 3. PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REVISIÓN.

¿DE QUÉ TRATABA EL ARTÍCULO?

En la decisión 15/6, la Conferencia de las Partes adoptó un enfoque multidimensional mejorado para la planificación, el seguimiento, la presentación de informes y el examen, que incluye un examen mundial de los progresos colectivos en la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. En la decisión 16/32, la COP estableció los procedimientos para el examen mundial y proporcionó orientación para la preparación del Informe Mundial sobre los progresos colectivos, que servirá como insumo clave para el examen en la COP17.

El Examen Mundial fue examinado conjuntamente por el SBSTTA-28 y el SBI-7, en consonancia con sus mandatos complementarios. Mientras que el SBSTTA analizó la evaluación científica y técnica que sustenta el examen, el SBI-7 se centró en la respuesta a la implementación: cómo abordar las deficiencias identificadas en el Informe Mundial y acelerar la implementación del KMGBF, incluso mediante el fortalecimiento de los medios de implementación y las contribuciones de toda la sociedad.

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES RESULTADOS?

La SBI-7 presentó recomendaciones para acelerar la implementación de las conclusiones del Informe Mundial, pero varios aspectos políticamente importantes siguen sin resolverse. En particular, la cuestión de considerar la Sección C del KMGBF y un enfoque que involucre a toda la sociedad en la implementación futura permanece sin resolver. Una propuesta sobre los medios de implementación y el acceso a la financiación para los titulares de derechos también permanece sin resolver, dejando pendiente la relación entre los llamamientos a una mayor participación en la implementación y los recursos necesarios para posibilitar dicha participación.

Un problema importante aún sin resolver se refiere al uso cada vez mayor de la expresión «actores distintos de los gobiernos nacionales» en lugar de nombrar explícitamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes y, cuando corresponda, a las personas de ascendencia africana. Si bien esta terminología puede servir de marco para diversos actores, las negociaciones no lograron definir cómo debe utilizarse sin menoscabar la condición, los derechos y las contribuciones específicas de los titulares de derechos y los colectivos afectados. Por consiguiente, la terminología pertinente queda pendiente de un análisis más profundo en la COP17. Esto es particularmente relevante, ya que el propio Informe Mundial se basa en información de actores distintos de los gobiernos nacionales para evaluar la implementación en toda la sociedad.

La recomendación también incluye un apartado sobre diálogos informales regionales y subregionales entre las Partes, los titulares de derechos y las partes interesadas para fomentar la colaboración y acelerar la implementación. Se reconoce que la cooperación técnica y científica y las estructuras de apoyo constituyen mecanismos para el aprendizaje entre pares, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades, si bien no se mantuvo un lenguaje más contundente sobre su posible función de convocatoria. Al mismo tiempo, las Partes no reabrieron el Marco de Seguimiento para introducir indicadores principales obligatorios adicionales, evitando así requisitos de presentación de informes adicionales mientras se consolida la implementación del marco existente.

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTAS DEFINICIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE JUSTICIA DE GÉNERO?

La Revisión Global determinará no solo cómo se evalúa el progreso, sino también qué contribuciones y obstáculos para la implementación se visibilizan y qué acciones se priorizan en respuesta. Por lo tanto, en la COP17 será importante resolver las cuestiones pendientes sobre la Sección C, el enfoque integral de la sociedad y la implementación basada en los derechos humanos, al tiempo que se garantiza que la terminología general como "actores distintos de los gobiernos nacionales" no elimine el reconocimiento específico de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes como titulares de derechos y colectivos con funciones, derechos y contribuciones específicas a la implementación del KMGBF.

Los llamamientos a una mayor participación en la implementación acelerada deben ir acompañados de medios de implementación accesibles. No se puede esperar que las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades locales y los jóvenes contribuyan a subsanar las deficiencias en la implementación sin un acceso adecuado a financiación, desarrollo de capacidades y cooperación técnica y científica. Los diálogos regionales y subregionales propuestos y las estructuras de apoyo existentes podrían proporcionar espacios importantes para identificar barreras y soluciones para la implementación directamente con los titulares de derechos, siempre que la participación sea significativa, cuente con los recursos suficientes y esté vinculada a la toma de decisiones, en lugar de ser tratada simplemente como una consulta.

Finalmente, la COP17 debería aprovechar el Examen Mundial para fortalecer la conexión entre la Meta 23, el Plan de Acción de Género y la implementación del KMGBF en su conjunto. El examen debería ayudar a identificar las deficiencias en la implementación con perspectiva de género y traducir esas deficiencias en acciones concretas, recursos y rendición de cuentas. Esto implica ir más allá del simple reconocimiento de la participación de las mujeres y examinar quién influye en las decisiones de implementación, quién tiene acceso a los recursos, cuyos conocimientos y contribuciones se reconocen y quién se beneficia de la implementación.

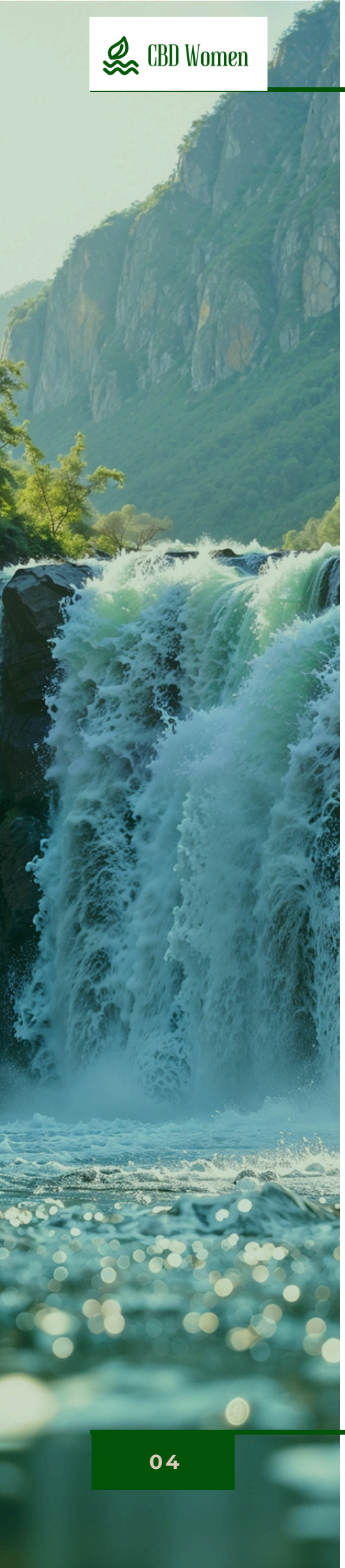
PUNTO 4.A MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

¿DE QUÉ TRATABA EL ARTÍCULO?

Este punto abordó la movilización de recursos para la aplicación del Convenio y del KMGBF, en particular el progreso hacia la Meta 19 y la implementación de la hoja de ruta para la movilización de recursos acordada en la COP16. Se debatieron la persistente brecha en la financiación de la biodiversidad, el limitado margen fiscal y la carga de la deuda en muchos países en desarrollo, así como las continuas barreras para acceder a la financiación internacional de la biodiversidad.

Se esperaba que la SBI-7 impulsara tres elementos particularmente importantes de la hoja de ruta: criterios para la estructura institucional que operará el mecanismo financiero del Convenio en virtud del Artículo 21; la identificación de obstáculos estructurales para la eficacia del financiamiento mundial de la biodiversidad y posibles medidas para abordarlos; y enfoques para ampliar la base de contribuyentes. Por lo tanto, estaban en juego la suficiencia y accesibilidad del financiamiento de la biodiversidad, la responsabilidad de proporcionarlo y la futura gobernanza y estructura del mecanismo financiero del Convenio.





¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES RESULTADOS?

La SBI-7 logró avances sustantivos limitados, dejando gran parte del paquete de movilización de recursos pendiente para la COP17. Se acordó la parte de la recomendación relativa a la SBI, incluidas las solicitudes de un informe de progreso actualizado sobre la decisión 16/34 y de que la Secretaría pusiera a disposición la lista no exhaustiva de áreas de convergencia y divergencia identificadas durante las negociaciones. Sin embargo, la resolución propuesta para la COP17 permanece completamente entre corchetes, lo que refleja la falta de acuerdo sobre varios de sus elementos políticos fundamentales.

En cuanto a la suficiencia del financiamiento, el proyecto de resolución de la COP17 reconoce que, a pesar de los aumentos reportados en los flujos financieros relacionados con la biodiversidad, el financiamiento público internacional sigue siendo insuficiente, impredecible y de acceso desigual, y que se requieren mayores esfuerzos para lograr la Meta 19. Respecto a la futura estructura institucional en virtud del Artículo 21, las Partes aún deben decidir si la COP17 debe “adoptar” o “tomar nota” de los criterios propuestos. El anexo mantiene los criterios mínimos establecidos mediante la decisión 16/34, que incluyen la autoridad y la orientación de la COP, la gobernanza equitativa y representativa, y el acceso justo, oportuno y simplificado para las Partes elegibles que sean países en desarrollo; sin embargo, los criterios adicionales permanecen fuertemente condicionados. El proyecto también propone invitar al FMAM y a otras instituciones financieras, incluidos los bancos multilaterales de desarrollo, a que tomen en cuenta los criterios en las reformas de sus operaciones.

En cuanto a los obstáculos para la financiación mundial de la biodiversidad, la SBI-7 no completó el trabajo sustantivo previsto en la hoja de ruta. La Secretaría había preparado un análisis específico de los obstáculos como uno de los insumos obligatorios del proceso, junto con la revisión de la estrategia de movilización de recursos y el desarrollo de los criterios del Artículo 21. Sin embargo, dado que el anexo pertinente no fue negociado, se eliminó de la recomendación. El borrador restante solicita, en cambio, que se continúe trabajando en medidas para mejorar la financiación mundial de la biodiversidad y movilizar recursos nuevos y adicionales de todas las fuentes. Esto deja a la COP17 sin un conjunto acordado de medidas para abordar las barreras estructurales ya identificadas, lo que hace que los próximos pasos en este trabajo sean particularmente importantes.

Finalmente, la ampliación de la base de contribuyentes sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos desde el punto de vista político. La recomendación incluye cuatro opciones alternativas entre corchetes, que reflejan diferentes enfoques sobre si otros países podrían contribuir y cómo. Durante la SBI-7, los países en desarrollo insistieron repetidamente en que la ampliación de la base no debería alterar las obligaciones de las Partes que son países desarrollados, de conformidad con el Artículo 20, mientras que otras Partes apoyaron la exploración de una base de contribuyentes más amplia. Por consiguiente, el tema se traslada a la COP17 sin acuerdo sobre el equilibrio entre la movilización de contribuciones adicionales y la preservación de las responsabilidades diferenciadas en virtud del Convenio.

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTAS DEFINICIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE JUSTICIA DE GÉNERO?

Los criterios adicionales para el futuro mecanismo financiero brindan una oportunidad concreta para abordar las desigualdades en la gobernanza y el acceso a la financiación de la biodiversidad. Los cuatro criterios mínimos acordados en la COP16, (a)–(d), permanecen sin cambios, mientras que los criterios adicionales se mantienen entre paréntesis. En la COP17, el criterio (g) debería reconocer explícitamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes, en lugar de agrupar a los titulares de derechos y los grupos de interés dentro de la categoría genérica de "todas las partes interesadas". El criterio (m) es particularmente importante y debería mantener la participación plena y efectiva en la toma de decisiones y el acceso directo a la financiación para los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes, sin condicionar dicho acceso a una carta de un coordinador nacional. El criterio (n) debería mantener las disposiciones más sólidas sobre rendición de cuentas, transparencia, seguimiento e informes, y quejas y reparación. En conjunto, estas disposiciones traducirían la gobernanza equitativa en reconocimiento, poder de decisión, acceso a los recursos y rendición de cuentas.

En segundo lugar, el escaso progreso en la superación de los obstáculos estructurales al financiamiento de la biodiversidad deja una importante brecha en materia de justicia. Los párrafos 7 a 9 reconocen que los obstáculos identificados por la Secretaría requieren mayor desarrollo y prevén trabajos adicionales antes de la COP18, pero las medidas contempladas en el párrafo 9(a) se presentan como voluntarias. La COP17 debería fortalecer esta vía estableciendo un proceso claro para abordar las barreras estructurales —incluidas la deuda, las restricciones fiscales, el acceso desigual al financiamiento y los flujos financieros perjudiciales— y vincular este trabajo con la implementación de la Meta 18 sobre incentivos perjudiciales. El análisis también debería examinar cómo estas condiciones estructurales y las reformas propuestas distribuyen los costos, los riesgos y los beneficios entre los países y dentro de ellos, incluidos sus impactos diferenciados en las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades locales y otros titulares de derechos.

Finalmente, el debate sobre la ampliación de la base de contribuyentes debe ir más allá de simplemente aumentar la lista de países o actores que se espera que contribuyan. Desde una perspectiva de equidad, la cuestión fundamental es cómo garantizar que los contribuyentes aporten efectivamente la parte que les corresponde de los recursos necesarios para cerrar la brecha de financiación de la biodiversidad, de conformidad con las responsabilidades, capacidades y obligaciones existentes en virtud del Convenio. Por consiguiente, la COP17 debería promover un enfoque de reparto equitativo de la carga que fortalezca la rendición de cuentas sobre las contribuciones e incremente los recursos totales disponibles, en lugar de permitir que una base de contribuyentes más amplia diluya o sustituya las obligaciones de las Partes que son países desarrollados en virtud del Artículo 20. Los nuevos contribuyentes y fuentes deben ser adicionales y complementarios, mientras que el objetivo principal sigue siendo asegurar una financiación pública internacional adecuada, predecible y sostenida para la implementación del KMGBF.





PUNTO 4.B MECANISMO FINANCIERO

¿DE QUÉ TRATABA EL ARTÍCULO?

El punto 4(b) examinó el mecanismo financiero del Convenio y su contribución a la aplicación del KMGBF. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) actúa como la estructura institucional que gestiona el mecanismo financiero en virtud del Convenio y funciona bajo la autoridad y la guía de la COP, ante la cual rinde cuentas.

La SBI-7 examinó la reposición del GEF-9 y brindó orientación adicional al GEF, así como dos procesos orientados al próximo ciclo de financiamiento: los Términos de Referencia (TdR) para evaluar las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo elegibles para el GEF-10 (2030-2034) y los TdR para la séptima revisión cuatrienal de la eficacia del mecanismo financiero. Estos procesos ayudarán, respectivamente, a determinar el nivel de recursos necesarios para la próxima reposición y a evaluar la eficacia con la que el mecanismo financiero proporciona recursos y apoya la implementación del Convenio.

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES RESULTADOS?

Un desacuerdo central giró en torno a los aproximadamente 3900 millones de dólares prometidos al GEF-9. Los países en desarrollo hicieron hincapié en la brecha entre los recursos disponibles y las crecientes necesidades de implementación, incluidas las obligaciones de los países desarrollados en virtud del Artículo 20, mientras que otras Partes hicieron mayor hincapié en la eficacia y la ampliación de la base de contribuyentes. Estas diferencias siguen reflejadas entre paréntesis sobre si la COP17 debería «acoger con beneplácito» o «reconocer» las promesas del GEF-9 y si debería expresar su preocupación por el hecho de que el nivel general de recursos siga siendo insuficiente para la implementación del KMGBF, en particular la Meta 19.
Al mismo tiempo, el borrador incluye directrices para mejorar la accesibilidad, la previsibilidad, la apropiación nacional, la transparencia y la aprobación y el desembolso oportunos de los recursos. Aún quedan por resolver cuestiones relativas a mecanismos de acceso directo más sólidos. Esto es importante porque las negociaciones no solo se centran en el volumen total de financiación, sino también en cómo se accede a los recursos y cómo se gestionan.

La SBI-7 también impulsó los dos procesos que definirán la financiación y la rendición de cuentas futuras. Los términos de referencia para la evaluación de las necesidades de financiación del GEF-10 fueron ampliamente consensuados, estableciendo la base para estimar los recursos que los países en desarrollo elegibles necesitarán durante el próximo ciclo de reposición. Se alcanzó un consenso menor sobre la séptima revisión de la eficacia: secciones clave de sus términos de referencia, en particular los criterios para evaluar la eficacia y los procedimientos para llevar a cabo la revisión, siguen sin resolverse. Entre los elementos propuestos se incluyen indicadores como el número de proyectos financiados, los plazos de desembolso y los impactos en las comunidades locales, mientras que las disposiciones relativas a la participación efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes también permanecen sin resolver. Estas decisiones determinarán si la eficacia se evalúa principalmente a través del desempeño operativo o también a través de la adecuación, la accesibilidad, la distribución y los impactos de la financiación.

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTAS DEFINICIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE JUSTICIA DE GÉNERO?

La principal preocupación radica en la suficiencia y la responsabilidad. La disminución de los recursos prometidos al GEF-9 se produce precisamente cuando se espera que los países en desarrollo aceleren la implementación del KMGBF. Un mecanismo financiero no puede garantizar una implementación equitativa si carece de recursos estructurales suficientes. Esto refuerza la importancia de una distribución justa de la carga y de que las Partes que son países desarrollados cumplan con sus compromisos en virtud del Artículo 20, en lugar de transferir la responsabilidad de subsanar las deficiencias de financiación a países y comunidades que ya soportan cargas de implementación desproporcionadas.

La suficiencia también debe ir acompañada de un acceso equitativo, poder de decisión y rendición de cuentas. La eficacia del mecanismo financiero no puede juzgarse únicamente por los montos programados, los proyectos aprobados o los plazos de desembolso: estas medidas dicen poco sobre quién accede y controla finalmente los recursos, quién influye en las prioridades de financiación o con qué equidad se distribuye el financiamiento. Por lo tanto, en la COP17, las Partes deben mantener referencias explícitas a los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes en los términos de referencia para la séptima revisión de la eficacia, al tiempo que fortalecen sus criterios para evaluar las barreras al acceso, la participación significativa en la toma de decisiones financieras y los resultados con perspectiva de género y basados en los derechos. Contar a las mujeres como beneficiarias por sí solo no es prueba suficiente de financiamiento equitativo.

De cara al futuro, la evaluación de las necesidades de financiación del GEF-10 cobra especial importancia, ya que lo que se reconoce ahora como una necesidad de financiación determinará las expectativas para la próxima reposición. Los compromisos de género corren el riesgo de seguir sin contar con los recursos suficientes si sus costos de implementación no se hacen visibles en dicha evaluación. Por consiguiente, la COP17 debería garantizar que los Términos de Referencia incluyan explícitamente los recursos que los países en desarrollo necesitan para implementar la Meta 23 y el Plan de Acción de Género, incluyendo una estimación específica de las necesidades de financiación para la implementación del Plan de Acción de Género. Esto comenzaría a reducir la brecha entre la adopción de compromisos de género y la presupuestación efectiva para su implementación.

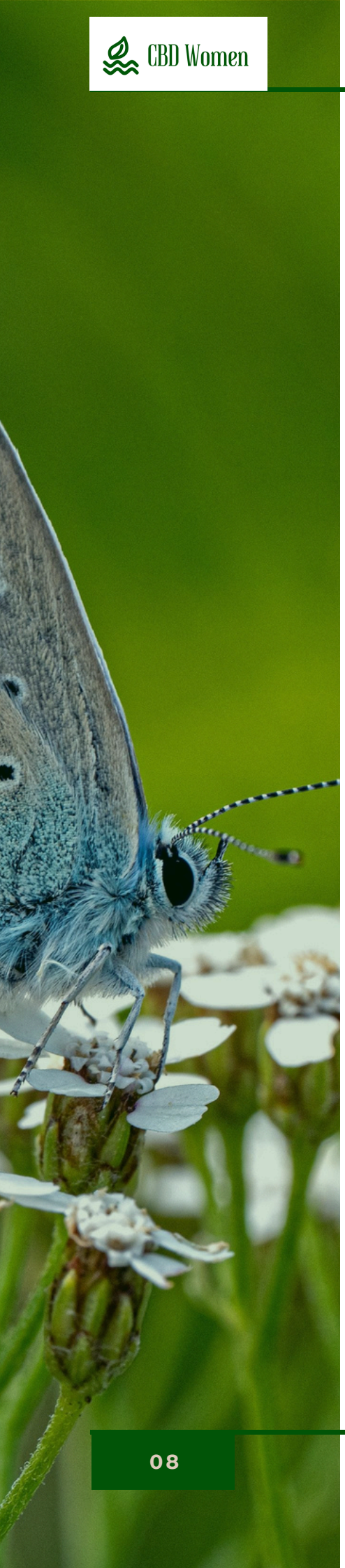
PUNTO 5. INFORMACIÓN DE SECUENCIAS DIGITALES SOBRE RECURSOS GENÉTICOS

¿DE QUÉ TRATABA EL ARTÍCULO?

En la COP16, las Partes adoptaron, mediante la decisión 16/2, las modalidades para la puesta en marcha del Mecanismo Multilateral para la Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios Derivados del Uso de la Información Digital de Secuencias (IDS) sobre Recursos Genéticos, incluido su fondo mundial, el Fondo Cali. El mecanismo busca posibilitar la distribución justa y equitativa de los beneficios monetarios y no monetarios derivados del uso de la IDS, manteniendo al mismo tiempo el acceso abierto a la misma para la investigación y la innovación.

La SBI-7 tenía la tarea de impulsar varios elementos de su implementación antes de la COP17. Estos incluían considerar posibles modalidades adicionales para el reparto de beneficios, posibles herramientas y modelos para que la DSI estuviera disponible públicamente y fuera accesible de manera transparente y responsable, y la metodología para evaluar la eficacia del Mecanismo Multilateral y del Fondo Cali.





¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES RESULTADOS?

El SBI-7 mantuvo la arquitectura básica acordada en la COP16 y avanzó en algunos aspectos de su operacionalización, pero varias de las cuestiones más trascendentales desde el punto de vista político siguen sin resolverse para la COP17. En particular, las Partes no llegaron a un acuerdo sobre posibles modalidades adicionales para la distribución de beneficios. Si bien hubo una mayor convergencia en la necesidad de mejorar la transparencia en torno a la DSI y su uso, persistieron dudas sobre las herramientas y los enfoques para lograrlo. También se avanzó en la metodología para evaluar la eficacia del Mecanismo Multilateral y el Fondo Cali, pero elementos clave relativos a su marco conceptual, enfoque y gobernanza siguen sin resolverse.

También surgió un importante problema de gobernanza en torno al Memorando de Entendimiento entre el Fondo Cali y la Oficina del Fondo Fiduciario Multipartito de las Naciones Unidas, firmado en febrero de 2025. Varias Partes de países en desarrollo cuestionaron el proceso mediante el cual se habían puesto en práctica los acuerdos y su alineación con la autoridad de la COP. El compromiso alcanzado en la SBI-7 deja constancia de la fecha de la firma del Memorando de Entendimiento y deja a la COP17 la tarea de considerar el curso de acción apropiado con respecto a su alineación y los arreglos de gobernanza, administrativos y operativos conexos. Asimismo, se acordó un seminario web entre períodos de sesiones para facilitar una mayor aclaración antes de la COP17.

Por lo tanto, el resultado impulsa la implementación sin resolver las cuestiones subyacentes de distribución y gobernanza: cómo generará el mecanismo contribuciones suficientes, si se necesitan modalidades adicionales, cómo se evaluará su eficacia y cómo los acuerdos operativos del Fondo Cali se mantendrán alineados con el marco de gobernanza acordado por las Partes en la COP16.

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTAS DEFINICIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE JUSTICIA DE GÉNERO?

La cuestión central no es solo si el Fondo Cali entra en funcionamiento, sino quién se beneficia del valor generado a través de DSI, quién participa en las decisiones sobre esos beneficios y si los recursos llegan a aquellos cuyo conocimiento, territorios y gestión contribuyen a la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, las cuestiones pendientes sobre contribuciones, asignación y gobernanza tienen implicaciones distributivas directas.

La Decisión 16/2 ya establece una importante base de equidad: al menos la mitad de los recursos del Fondo Cali están destinados a apoyar las necesidades identificadas por los propios pueblos indígenas y las comunidades locales, incluidas las mujeres y los jóvenes, a través de los gobiernos o pagos directos mediante instituciones designadas por ellos. A medida que el mecanismo entre en funcionamiento, este compromiso debe traducirse en financiación accesible y una influencia significativa sobre cómo se asignan y utilizan los recursos.

El texto del SBI-7 también incluye referencias explícitas a mujeres indígenas y mujeres de comunidades locales. Esta visibilidad es importante, pero solo tendrá sentido si la revisión de la eficacia evalúa no solo la cantidad de dinero que el Fondo moviliza y desembolsa, sino también quién puede acceder a esos recursos, quién participa en las decisiones y si los beneficios contribuyen a resultados más equitativos. Su colega tiene razón al afirmar que muchas de estas implicaciones de género aún no pueden evaluarse completamente mientras las modalidades subyacentes y la metodología de revisión permanezcan sin resolver.

Para la COP17, la prioridad en materia de género y justicia es garantizar que las decisiones sobre modalidades adicionales, gobernanza y la revisión de la eficacia protejan el propósito de reparto de beneficios del mecanismo y hagan que sus compromisos de equidad sean cuantificables en la práctica. Esto incluye salvaguardar la participación y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, asegurar que las mujeres indígenas y las mujeres de las comunidades locales sigan siendo claramente visibles, y evaluar no solo si se generan beneficios, sino también quién los recibe y quién tiene poder sobre su asignación.

PUNTO 7. SEGUNDA EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA EFICACIA DEL PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE EL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y LA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN.

¿DE QUÉ TRATABA EL ARTÍCULO?

El punto 7 se refería a los preparativos para la segunda evaluación y revisión de la eficacia del Protocolo de Nagoya, que llevará a cabo el NP-MOP 6. La evaluación examina los progresos en la aplicación del Protocolo y su eficacia para lograr la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Se basa en informes nacionales, información del Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios (ABS Clearinghouse), encuestas específicas, la labor del Comité de Cumplimiento y del Comité Consultivo Informal sobre el Desarrollo de Capacidades, y un estudio preliminar sobre las causas de los desafíos en la aplicación y el cumplimiento.

El SBI-7 examinó las conclusiones de dicha evaluación, un marco de indicadores actualizado y recomendaciones sobre cómo fortalecer la implementación, incluidos los procedimientos de ABS, los puntos de control, la Cámara de Compensación de ABS, el cumplimiento, el desarrollo de capacidades, los recursos financieros y la futura puesta en marcha del mecanismo multilateral mundial de reparto de beneficios en virtud del Artículo 10.

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES RESULTADOS?

La SBI-7 reconoció los avances en la implementación del Protocolo de Nagoya, si bien identificó deficiencias persistentes en cuanto a eficacia, cumplimiento y medios de implementación. Un avance importante fue el mayor énfasis en si los sistemas de ABS están produciendo resultados en la práctica, y no solo en si existen medidas legislativas, administrativas y de política. La recomendación insta a que las futuras metodologías e indicadores de evaluación capturen la operacionalización de los sistemas de ABS y los resultados alcanzados en términos de beneficios compartidos, y alienta a las Partes a proporcionar información más completa y desglosada sobre los beneficios monetarios y no monetarios, sus beneficiarios, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales, y la proporción destinada a la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible.

El resultado también impulsa la puesta en marcha de los puestos de control y del Centro de Compensación de Acceso y Posibilidad de Adquisición de Derechos Humanos (ABS Clearinghouse-House), incluyendo procedimientos de ABS más claros y ágiles, la publicación de información relevante y un intercambio de información más sólido.





También se abordó el uso limitado de los procedimientos de cumplimiento del Protocolo: se solicita a la Secretaría, junto con el Comité de Cumplimiento, que evalúe por qué no se ha activado el mecanismo, incluidas las posibles barreras de conocimiento, accesibilidad, procedimiento, institucionales y prácticas.

También se abordaron la participación y los protocolos comunitarios. La recomendación invita a las Partes a garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluidas las mujeres y los jóvenes, en los procesos de acceso y participación en los beneficios (ABS), incluso mediante protocolos y procedimientos comunitarios. Asimismo, establece que dichos protocolos y procedimientos solo se pondrán a disposición a través del Centro de Intercambio de Información sobre ABS si los pueblos indígenas y las comunidades locales interesadas dan su consentimiento, protegiendo al mismo tiempo la confidencialidad de la información.

Una cuestión importante sin resolver se refiere al Artículo 10 y al mecanismo multilateral global de reparto de beneficios. El SBI-7 acordó establecer un proceso entre períodos de sesiones impulsado por las Partes para avanzar en sus modalidades y solicitó una reunión abierta, con la participación de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las partes interesadas pertinentes, para desarrollar elementos que se considerarán en la NP-MOP 7. La financiación también sigue sin resolverse: si bien se alentaron los recursos financieros adicionales y el apoyo continuo del FMAM, las propuestas relativas a una ventana de financiación específica para el ABS y la financiación del presupuesto básico para funciones clave del Protocolo de Nagoya quedaron en suspenso.

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTAS DEFINICIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE JUSTICIA DE GÉNERO?

El mayor énfasis en los beneficios reales y sus beneficiarios es particularmente importante. La distribución justa y equitativa de los beneficios no puede evaluarse simplemente contabilizando las leyes, permisos o acuerdos sobre acceso a beneficios. Requiere preguntarse quién recibe beneficios monetarios y no monetarios, quién participa en las decisiones sobre su distribución, quién aporta conocimientos para facilitar el acceso y si quienes aportan conocimientos y recursos tienen un poder de decisión significativo. El avance hacia una información más desagregada sobre los beneficiarios crea una oportunidad importante para visibilizar estas desigualdades distributivas.

El reconocimiento de la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluidas las mujeres y los jóvenes, es fundamental, pero la participación por sí sola no garantiza resultados equitativos ni el control sobre los recursos y el conocimiento. Por lo tanto, es importante la salvaguarda de que los protocolos comunitarios solo se difundan a través del Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios (ABS) con el acuerdo de las comunidades interesadas. En términos más generales, el ABS con perspectiva de género requiere atención no solo a la participación de las mujeres, sino también al reconocimiento de sus conocimientos, su influencia en las decisiones y la recepción y el control efectivos de los beneficios.

El mecanismo del artículo 10, aún sin resolver, tiene importantes implicaciones para la justicia, ya que puede determinar cómo se comparten los beneficios en situaciones donde los acuerdos bilaterales de acceso y participación en los beneficios (ABS) son insuficientes, incluso en contextos transfronterizos. Su diseño futuro deberá abordar no solo quién contribuye y quién recibe los beneficios, sino también qué derechos, conocimientos y sistemas de gobernanza se reconocen al determinar el acceso y la distribución.

Finalmente, los medios de implementación y el acceso a la reparación siguen siendo fundamentales. Sin financiamiento predecible, capacidad e instituciones que funcionen correctamente, los puntos de control, los protocolos comunitarios, la Cámara de Compensación de ABS y los mecanismos de cumplimiento pueden existir formalmente sin ser efectivos en la práctica. Por lo tanto, el hecho de que SBI-7 esté examinando ahora las barreras para el uso del mecanismo de cumplimiento es importante desde una perspectiva de justicia: los derechos y los compromisos de reparto de beneficios tienen un valor limitado cuando las comunidades afectadas no pueden acceder de manera realista a la información, los procedimientos o la reparación. Para NP-MOP 6 y el proceso del Artículo 10, la cuestión central es si el Protocolo puede avanzar de la participación formal y la administración de ABS hacia un control significativo, la rendición de cuentas y la distribución equitativa de los beneficios.

PUNTO 10. CREACIÓN DE CAPACIDADES, DESARROLLO Y COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA.

¿DE QUÉ TRATABA EL ARTÍCULO?

El punto 10 se refería a los avances en la aplicación del marco estratégico a largo plazo para el desarrollo de capacidades y el mecanismo de cooperación técnica y científica, establecido en virtud de la decisión 15/8 y desarrollado posteriormente mediante decisiones de la COP. El mecanismo incluye una red de centros regionales y subregionales de apoyo a la cooperación técnica y científica y una Entidad de Coordinación Global (ECG) destinada a coordinar y fortalecer el apoyo a la aplicación del Convenio y del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (KMGBF).

La SBI-7 analizó los avances en la puesta en marcha de estos mecanismos, incluyendo la labor de los centros de apoyo y la GCE, identificó deficiencias y obstáculos en materia de capacidades, así como los acuerdos financieros e institucionales necesarios para su funcionamiento a largo plazo. También examinó cómo el desarrollo de capacidades y la cooperación técnica y científica podrían responder con mayor eficacia a las necesidades detectadas mediante la implementación nacional y la revisión global del progreso colectivo.

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES RESULTADOS?

La SBI-7 impulsó la puesta en marcha del mecanismo de cooperación técnica y científica, tomando nota de los avances en la Entidad de Coordinación Global (ECG) y su proyecto de plan de trabajo y presupuesto, y solicitando un plan de trabajo y presupuesto revisados para su consideración en la COP17. El resultado también refuerza el papel de los centros regionales y subregionales de apoyo a la cooperación técnica y científica para responder a las necesidades de implementación, solicitándoles que tengan en cuenta las deficiencias, los desafíos y las barreras identificadas a través del Informe Global y los séptimos informes nacionales, incluidos los desafíos relacionados con el uso de indicadores.

La financiación y la sostenibilidad a largo plazo del mecanismo surgieron como cuestiones centrales. Se invita a las partes, otros gobiernos, gobiernos subnacionales y locales, y demás actores pertinentes que estén en condiciones de hacerlo, a proporcionar recursos financieros y contribuciones en especie adecuados, predecibles, oportunos y de fácil acceso para apoyar los programas y el funcionamiento a largo plazo del GCE y los centros de apoyo.





Asimismo, se solicita al Secretario Ejecutivo que fortalezca la movilización de recursos, incluyendo la colaboración con fuentes de financiación multilaterales. Es importante destacar que el resultado reconoce que el apoyo del sector privado debe complementar, y no sustituir, el apoyo público internacional para el desarrollo de capacidades.

Las negociaciones también abordaron quiénes deberían participar en el desarrollo de capacidades. El texto final hace referencia a las "organizaciones de mujeres y jóvenes", junto con los pueblos indígenas, las comunidades locales y otras partes interesadas relevantes. Durante las negociaciones, se cuestionaron las propuestas para especificar las referencias a mujeres y jóvenes mediante términos como "organizaciones" o "representantes", y la cuestión más amplia de cómo reconocer de forma inclusiva a estos colectivos se convirtió en un punto importante de debate.

En términos más generales, las Partes hicieron hincapié en el desarrollo de capacidades basado en las necesidades y dirigido por los países, así como en la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. Los debates también revelaron diferencias sobre el alcance del financiamiento, incluyendo si el apoyo debería centrarse en proyectos impulsados por los países o extenderse de manera más amplia al establecimiento y funcionamiento de los propios centros de apoyo regionales y subregionales.

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTAS DEFINICIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE JUSTICIA DE GÉNERO?

La cooperación técnica y científica no debe reproducir un modelo unidireccional en el que la experiencia y las soluciones fluyen desde instituciones con mayores recursos hacia países y comunidades que se perciben como carentes de capacidad. El conocimiento y la experiencia ya existen a nivel nacional y local, incluso entre los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes, los investigadores y los profesionales. Los centros de apoyo regionales y subregionales pueden contribuir a conectar y financiar esta experiencia mediante la cooperación Sur-Sur, triangular y con base local, así como la coproducción de conocimiento.

Esto hace que la financiación adecuada, predecible y accesible para el GCE y los centros de apoyo sea esencial. Su capacidad para responder a las prioridades nacionales y forjar alianzas sostenibles depende de recursos suficientes. Un enfoque con perspectiva de género también debería permitirles conectar sistemáticamente con la experiencia y los conocimientos locales en materia de género, así como con la experiencia de las mujeres, de modo que la perspectiva de género sea un factor determinante en la definición de los retos de la implementación y las respuestas técnicas, en lugar de incorporarla posteriormente.

Para la COP17, la prioridad debería ser, por lo tanto, dotar de recursos suficientes a la estructura de cooperación técnica y científica, garantizando al mismo tiempo que movilice y valore la diversidad de conocimientos locales, sin imponer barreras institucionales innecesarias a la participación. Esto contribuiría a que el desarrollo de capacidades pasara de un modelo de transferencia de conocimientos a uno de intercambio equitativo, colaboración y coproducción.

PUNTO 11. MECANISMO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

¿DE QUÉ TRATABA EL ARTÍCULO?

El punto 11 se refería al progreso en la implementación del Programa de Trabajo del Mecanismo de Intercambio de Información (MCI) para el período 2024-2030 y la Estrategia de Gestión del Conocimiento que respalda el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (KMGBF). El MCI facilita el acceso y el intercambio de datos, información y conocimientos relacionados con la biodiversidad, mientras que la Estrategia de Gestión del Conocimiento proporciona un marco más amplio para generar, recopilar, organizar, compartir y utilizar el conocimiento en apoyo del Marco. Este trabajo es particularmente relevante para la Meta 21, que aborda el acceso a los mejores datos, información y conocimientos disponibles para la gobernanza de la biodiversidad, reconociendo que el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y las comunidades locales solo debe ser consultado con su consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con la legislación nacional.

La SBI-7 examinó los avances en el fortalecimiento del portal central de los Sistemas de Gestión de la Biodiversidad (SGBD) y de los SGBD nacionales, la mejora de la organización y la accesibilidad de la información relacionada con la biodiversidad y la interoperabilidad entre sistemas, el desarrollo de herramientas como Bioland y el fortalecimiento de vocabularios, taxonomías, ontologías y estándares de metadatos comunes. También consideró el desarrollo de capacidades y el apoyo técnico para que las Partes, en particular los países en desarrollo, puedan establecer, poner en funcionamiento y fortalecer sus SGBD nacionales.

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES RESULTADOS?

La reunión del SBI-7 impulsó la implementación tanto del Programa de Trabajo del CHM como de la Estrategia de Gestión del Conocimiento, haciendo mayor hincapié en la capacidad, la interoperabilidad y el funcionamiento práctico de los CHM nacionales. Las Partes acordaron la necesidad de fortalecer el acceso a la información y su usabilidad a través del portal central y la herramienta de informes en línea, así como de mejorar el intercambio de experiencias, buenas prácticas, casos de éxito y lecciones aprendidas a nivel nacional, regional y mundial.

Los medios de implementación surgieron como un tema importante. La recomendación final insta a las Partes, de conformidad con los Artículos 20 y 21 de la Convención, e invita a otros gobiernos y organizaciones pertinentes a brindar apoyo financiero y técnico para el desarrollo de capacidades y la implementación del Programa de Trabajo y la Estrategia de Gestión del Conocimiento del CHM, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de los países en desarrollo, especialmente los PMA y los PEID. Durante las negociaciones, los países en desarrollo destacaron que los sistemas eficaces de intercambio de conocimientos no pueden funcionar sin una capacidad financiera, técnica e institucional adecuada.

El resultado también refuerza el papel de los centros regionales y subregionales de apoyo a la cooperación técnica y científica, invitándolos (y, cuando corresponda, a otros actores distintos de los gobiernos nacionales) a colaborar con las Partes y compartir información y experiencias de implementación a través del Mecanismo de Coordinación de la Información (MCI). Esta formulación es relevante para el debate más amplio que se desarrolla en el marco del SBI-7 sobre cómo se identifica a los actores no estatales, los titulares de derechos y los grupos de interés dentro de los procesos de implementación del CDB.





La SBI-7 también hizo mayor hincapié en la interoperabilidad y las tecnologías emergentes. Se solicita al Secretario Ejecutivo que priorice las mejoras derivadas, entre otras cosas, del uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías nuevas pertinentes, junto con las mejoras en la herramienta de presentación de informes en línea y la accesibilidad, la capacidad de búsqueda y la usabilidad de la información en el sitio web del CDB. Asimismo, se prevé la celebración de talleres regionales de gestión del conocimiento entre la COP17 y la COP18.

Finalmente, la recomendación establece una vía para evaluar la implementación del Programa de Trabajo y la Estrategia de Gestión del Conocimiento de los MHC antes de la COP19, vinculada a la revisión global del progreso colectivo. Se espera que el análisis tenga en cuenta los diferentes niveles de desarrollo y puesta en marcha de los MHC nacionales y puede incluir indicadores voluntarios para evaluar si los MHC nacionales funcionan correctamente y contribuyen a la implementación del KMGBF.

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTAS DEFINICIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE JUSTICIA DE GÉNERO?

Persiste una clara brecha en el reconocimiento de los roles y contribuciones distintivas de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes dentro de la Gestión del Conocimiento Humano y los procesos de gestión del conocimiento en general. Su participación corre el riesgo de ser considerada principalmente como usuaria, contribuyente o fuente de información, en lugar de ser reconocida como una de las entidades que ya generan conocimiento, documentan la biodiversidad, realizan esfuerzos de conservación y contribuyen a la implementación del KMGBF. El uso de formulaciones más amplias, como «actores distintos de los gobiernos nacionales», es particularmente relevante en este contexto, ya que puede ocultar los derechos, los sistemas de conocimiento y las contribuciones distintivas de los titulares de derechos y las comunidades, incluidas las barreras específicas que enfrentan las mujeres para que su conocimiento sea reconocido y valorado.

Por lo tanto, el fortalecimiento del Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC) debe ir más allá de la mejora de la infraestructura técnica y garantizar una participación plena, efectiva, inclusiva y con perspectiva de género en el diseño, la implementación y la gobernanza de los sistemas de conocimiento. Los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes deben tener oportunidades significativas no solo para acceder a la información y proporcionarla, sino también para influir en cómo se recopila, clasifica, gestiona, comparte y utiliza el conocimiento para la toma de decisiones y la elaboración de informes. Esto cobra cada vez más importancia a medida que el SGC explora la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, que pueden reproducir sesgos y exclusiones existentes si el conocimiento y las perspectivas que sustentan estos sistemas no son suficientemente diversos.

Una mayor accesibilidad debe ir acompañada de derechos y garantías apropiadas en torno al intercambio de conocimientos. El fortalecimiento de la interoperabilidad y el acceso no debe implicar que el conocimiento tradicional o comunitario se convierta automáticamente en abierto o extraíble. La implementación debe respetar el consentimiento libre, previo e informado, cuando corresponda, así como los derechos y el control apropiados sobre el conocimiento, en particular en relación con el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Finalmente, la participación equitativa en los sistemas de conocimiento depende de la capacidad, la tecnología y los recursos. Las diferencias en la capacidad digital e institucional pueden determinar qué conocimiento se documenta, se hace accesible y se visibiliza dentro de los sistemas globales de biodiversidad. Por lo tanto, es fundamental contar con un apoyo financiero y técnico adecuado, especialmente para los países en desarrollo. Sin estas dimensiones, los sistemas de conocimiento cada vez más sofisticados corren el riesgo de reproducir las desigualdades existentes; con ellas, el CHM puede convertirse en una base de conocimiento más equitativa y representativa para la implementación del KMGBF.

PUNTO 12. INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DENTRO Y ENTRE LOS SECTORES.

¿DE QUÉ TRATABA EL ARTÍCULO?

En la decisión 16/13, la COP proporcionó orientación para seguir trabajando en la incorporación de la biodiversidad dentro y entre los sectores, incluidos elementos que la SBI deberá considerar antes de la COP17. Se solicitó al Secretario Ejecutivo, entre otras cosas, que integrara la incorporación de la biodiversidad en los diálogos regionales y subregionales, fortaleciera la cooperación con las organizaciones y los procesos pertinentes, recopilara buenas prácticas, herramientas y orientación, y apoyara el desarrollo de capacidades conexas en colaboración con las Partes, los centros de apoyo a la cooperación técnica y científica, los pueblos indígenas y las comunidades locales, las redes de mujeres y jóvenes y otros actores pertinentes.

La reunión del SBI-7 examinó un informe de progreso y una visión general estructurada de las prácticas, herramientas, mecanismos, directrices y soluciones disponibles para la integración de la biodiversidad. Los debates se centraron en cómo fortalecer la integración de la biodiversidad en las políticas, la planificación y la toma de decisiones gubernamentales, tanto dentro como entre los sectores, incluyendo la coordinación institucional, el desarrollo de capacidades, los enfoques sectoriales, la colaboración con el sector empresarial y financiero, y los recursos necesarios para apoyar dicha integración, especialmente en los países en desarrollo.

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES RESULTADOS?

La SBI-7 impulsó un enfoque más orientado a la implementación para la transversalización. La recomendación reconoce la importancia de los enfoques inclusivos, una mayor interacción entre la ciencia y las políticas, y un mayor intercambio y adopción de buenas prácticas y herramientas. Es fundamental que las Partes fortalezcan y aceleren la transversalización reduciendo la brecha entre la integración de la biodiversidad en las políticas y regulaciones y su aplicación efectiva en la práctica, fortaleciendo las capacidades institucionales y técnicas y la coordinación interministerial, e involucrando a los sectores empresarial, público y financiero.

Sin embargo, varias cuestiones sustantivas siguen sin resolverse para la COP17. Entre ellas se incluyen las disposiciones entre paréntesis relativas a los planes sectoriales nacionales, sectores económicos y de subsistencia específicos, el uso sostenible y las actividades productivas, así como nuevas medidas relacionadas con las empresas y las finanzas. Las negociaciones también revelaron diferencias persistentes sobre el alcance de los enfoques que abarcan a todo el gobierno y a toda la sociedad.

El lenguaje sobre quiénes deben participar y contribuir a la transversalización sigue sin estar claro, con formulaciones contrapuestas que van desde referencias explícitas a los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad, hasta la categoría más amplia de «actores distintos de los gobiernos nacionales». Esto deja sin resolver si los titulares de derechos y los grupos específicos seguirán siendo visibles de forma explícita dentro del marco de la transversalización o si quedarán subsumidos en una categoría más amplia de actores no estatales.





¿QUÉ SIGNIFICAN ESTAS DEFINICIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE JUSTICIA DE GÉNERO?

La transversalización tiene importantes implicaciones de género y justicia, ya que las decisiones en sectores como la agricultura, la pesca, la silvicultura, la infraestructura, el turismo, la energía y las finanzas afectan el acceso a la tierra y los recursos, los medios de subsistencia, los sistemas alimentarios y la distribución de los costos y beneficios ambientales y económicos. Por lo tanto, es necesario reconocer a las mujeres y a otros titulares de derechos no solo como participantes en los procesos de transversalización, sino como actores capaces de influir en las decisiones mediante las cuales la biodiversidad se integra en las políticas económicas y sectoriales. Como demostraron las negociaciones, la participación no es lo mismo que el poder de decisión.

Para la COP17, la prioridad debe ser garantizar que la transversalización tenga en cuenta el género, se base en los derechos y cuente con los recursos suficientes. Esto implica mantener el reconocimiento explícito de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes; fortalecer su participación y liderazgo significativos; abordar los impactos diferenciados y proteger los derechos a las tierras y los recursos; y asegurar que la transversalización en los sectores empresarial y financiero vaya acompañada de rendición de cuentas y salvaguardias. Los medios de implementación también serán fundamentales: los países en desarrollo necesitan la capacidad financiera, técnica e institucional adecuada para integrar la biodiversidad en todos los sectores sin generar responsabilidades adicionales sin financiación.

PUNTO 13. COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA.

¿DE QUÉ TRATABA EL ARTÍCULO?

El punto 13 se refería al proyecto de plan de acción mundial para la educación sobre biodiversidad, elaborado de conformidad con la decisión 16/10 para armonizar el programa de trabajo de comunicación, educación y sensibilización pública (CEPA) del Convenio con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, en particular las acciones contempladas en la sección K del Marco. El plan abarca el período hasta 2030 y se considera un documento vivo, cuya aplicación se revisará en la COP18 y la COP19.

El Plan busca fortalecer la educación sobre biodiversidad en todos los niveles de aprendizaje: formal, no formal e informal, incluyendo una mayor alfabetización en biodiversidad, aprendizaje transformador, capacitación docente, integración de políticas y currículos, participación de toda la sociedad y financiamiento sostenible. El SBI-7 examinó tanto el borrador del Plan como el borrador de la decisión que lo acompaña, incluyendo las disposiciones para su posterior desarrollo, adopción, financiamiento, participación, seguimiento e informes.

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES RESULTADOS?

El SBI-7 acogió con beneplácito el borrador del plan de acción mundial para la educación sobre biodiversidad como un documento vivo, que se perfeccionará mediante revisión por pares y será examinado nuevamente por el SBI antes de la COP18. El Plan abarca la educación formal, no formal e informal e incluye un firme reconocimiento de los diversos sistemas de conocimiento, los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes. Es importante destacar que sus principios rectores incluyen un compromiso independiente con la implementación con perspectiva de género, vinculado a la decisión 15/11 y la Meta 23.

La perspectiva de género e inclusión también se refleja en las condiciones propicias y el marco de seguimiento. Las organizaciones de mujeres y jóvenes figuran entre los actores clave del marco de resultados, y el Plan fomenta la recopilación de información desglosada por edad y género, así como una mayor participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes en el seguimiento, la evaluación y la presentación de informes.

Sin embargo, dos disposiciones importantes permanecen sin resolver. El párrafo 5, relativo a alentar a las Partes a utilizar e implementar el Plan, sigue sin resolverse, al igual que el párrafo 7, que trata sobre el apoyo técnico y financiero adecuado y accesible, incluidos recursos específicos y de fácil acceso para los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes, en el marco de iniciativas educativas lideradas por la comunidad. No obstante, el Plan incluye una disposición no vinculante que respalda el acceso equitativo y directo a la financiación para estos grupos.

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTAS DEFINICIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE JUSTICIA DE GÉNERO?

El Plan proporciona una base sólida para reconocer a las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades locales y los jóvenes no solo como receptores de educación sobre biodiversidad, sino también como poseedores de conocimientos, educadores y actores clave en su diseño, implementación y seguimiento. Por lo tanto, el principio independiente de perspectiva de género y las referencias a la participación significativa, los diversos sistemas de conocimiento y la información desagregada constituyen logros importantes.

Para la COP17, las prioridades deben incluir la resolución de los puntos restantes sobre la implementación y el acceso al apoyo financiero, así como el fortalecimiento de los objetivos e indicadores con perspectiva de género en las cuatro tablas del marco de resultados, de manera que la igualdad de género se integre en todo el Plan y no se limite principalmente a sus principios rectores y condiciones propicias. Las organizaciones y redes de mujeres, incluido el Grupo Parlamentario de Mujeres del CDB, deben ser reconocidas explícitamente entre los actores que contribuyen al Plan. Finalmente, se deben recopilar datos desagregados por sexo sobre participación, liderazgo y alcance de manera más sistemática, en lugar de solo “cuando corresponda”, para que las futuras revisiones puedan evaluar quién participa, quién lidera, cuyo conocimiento se reconoce y quién se beneficia de la educación sobre biodiversidad.

El Grupo de Mujeres del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD WC) es el principal grupo de mujeres dentro del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se trata de una plataforma global autoorganizada que apoya a mujeres y niñas de todo el mundo para que defiendan sus derechos en los procesos de toma de decisiones relacionados con la biodiversidad en todos los niveles.

Para más información: coordination@cbdwomenscaucus.org

